

Córdoba. Resumen del procedimiento ordinario provincial y municipal. *Solve et repete*. Suspensión del acto administrativo. Competencia federal. Tutela cautelar. Acción declarativa de Certeza y originaria de inconstitucionalidad. La CIACIS

María Vázquez — 2/6/2026

Ciudad de Córdoba.
Ciacis - Nuevo hecho
imponible.
Contribución SOBRE
COMERCIO DIGITAL.



"Banco Credicoop Cooperativo Limitado c/ Municipalidad de Córdoba"

Declaran nulas resoluciones que designan a un banco como agente de retención de tasa municipal

La normativa comunal obligaba a la entidad financiera a retener la Contribución que incide sobre la Actividad Comercial, Industrial y de Servicios en operaciones con proveedores.



Procedimiento tributario provincial · Cód. Tributario de Córdoba (Ley 6006)

Determinación de oficio · Arts. 20, 62 y 66

Art. 20 · Facultades de verificación y fiscalización

Liquidación provisional prevista en el proceso de verificación y fiscalización
Pueden RECTIFICAR las DDJJ (invita a la rectificación voluntaria)

No ratifica → determinación de oficio

Determinación de Oficio · Art. 62 y ss.

Art. 66 · Se corre vista por 15 días

Al contribuyente y/o responsable

NO comparece
REBELDÍA

Contesta la vista

Reconociendo · negando · observando
+ ofrece prueba

RESOLUCIÓN

Vencido el plazo probatorio o concluidas las MMP
Plazo: 90 días para resolver — si no, CADUCIDAD

Procede la determinación de oficio cuando:

- El contribuyente no presentó declaración jurada
- La presentó, pero ofrece dudas sobre su sinceridad o exactitud, o es impugnada
- Cuando se prescinda de la DDJJ como base de la determinación

Durante la vista y la prueba

- Pago voluntario: si paga lo adeudado + accesorios, se reduce la multa según el momento en que lo haga
- Prueba: el juez administrativo la admite o no; el plazo de producción lo fija la DPF, no inferior a 5 días (sólo prorrogable por la Dirección)
- MMP: la Dirección puede disponerlas en cualquier estado, con notificación al interesado

Resolución: contenido y efectos

- Contenido: tributo + multa (si corresponde) + recargo resarcitorio + actualización
- Si se allana, no se requiere resolución: vale como DDJJ para el contribuyente y como determinación de oficio para el Fisco
- Queda firme a los 15 días de notificada al contribuyente

Procedimiento tributario provincial · Cód. Tributario de Córdoba (Ley 6006)

Vía recursiva administrativa · Recurso de reconsideración (Art. 154 y ss.)

RECURSOS · proceden ante

Resoluciones que determinan obligaciones tributarias, anticipos, pagos a cuenta y accesorios; imponen sanciones (no clausura); resuelven demanda de repetición o exenciones; respuesta de la Administración en la consulta vinculante

Recurso de reconsideración · Art. 154 y ss.

15 días desde la notificación · ante LA DIRECCIÓN
Fundar y ofrecer toda la prueba · acompañar la documental

Examen de admisibilidad

La Administración tiene 5 días para resolver sobre la procedencia y si se interpuso en plazo

Apertura de prueba

No apertura de prueba

Medidas para mejor proveer (en su caso)

Resolución del recurso

Tras la producción de la prueba y, en su caso, las MMP · plazo: 30 días desde la interposición

Si no resuelve → Pronto Despacho por 20 días → resuelve / no resuelve

Aclaratoria

5 días para interponerla

AGOTADA LA VÍA ADMINISTRATIVA

Procedimiento tributario provincial · Cód. Tributario de Córdoba (Ley 6006)

Etapa judicial · demanda contencioso-administrativa (Art. 162 CTP y Ley 7182)

Demanda contencioso-administrativa · Art. 162 CTP y Ley 7182

Cámaras C.A. 1ª, 2ª y 3ª nom. (Arturo M. Bas) · TSJ Sala C.A. = 2ª instancia
30 días para interponer · NO rige el solve et repete

Antes: solve et repete = pago previo (tributo + actualización + recargos + intereses), sustituible por caución

Comunicar la interposición dentro de 5 días

Trámite inicial de la instancia

Remisión de actuaciones adm. (10 d.) → vista al Fiscal sobre habilitación de la instancia →
intima a la contraria a comparecer → traslado de la demanda 18 d. (art. 23 Ley 7182)

Excepciones de previo y especial pronunciamiento

Traslado a la actora 5 d. (prueba 10 d. si la piden) · el tribunal resuelve en 20 d.

Prueba · 30 días

- a) Documental, pericial y confesional: hasta 10 d. antes del vencimiento del plazo
- b) Testimonial y declaración de autoridades adm.: en los primeros 5 d. de apertura, de oficio

Alegatos · 9 días (art. 36 Ley 7182)

Autos para sentencia · sentencia en 60 días

Recursos contra la sentencia

Reposición · Aclaratoria · Apelación · Casación

Con la demanda se acompaña (art. 1)

- a) Instrumento que acredite la representación
- b) Documentos que acrediten la posesión de la situación jurídico-subjetiva reclamada
- c) Acto que motiva la demanda

Suspensión del acto · Art. 19 Ley 7182

- Se pide al interponer la demanda y se funda el grave daño
 - El tribunal resuelve en 10 d., previa vista a la contraria por 5 d.; puede exigir caución
 - El solo requerimiento + notificación importa la prohibición de innovar hasta resolver el incidente y, si no ocurre, hasta máx. 60 d. de iniciada la demanda.
- Dicha resolución que rechaza la suspensión es, por regla, irrecurrible (no es definitiva); pero deviene recurrible por excepción cuando sus efectos generan un perjuicio de imposible o tardía reparación o gravedad institucional, o por las vías específicas reconocidas

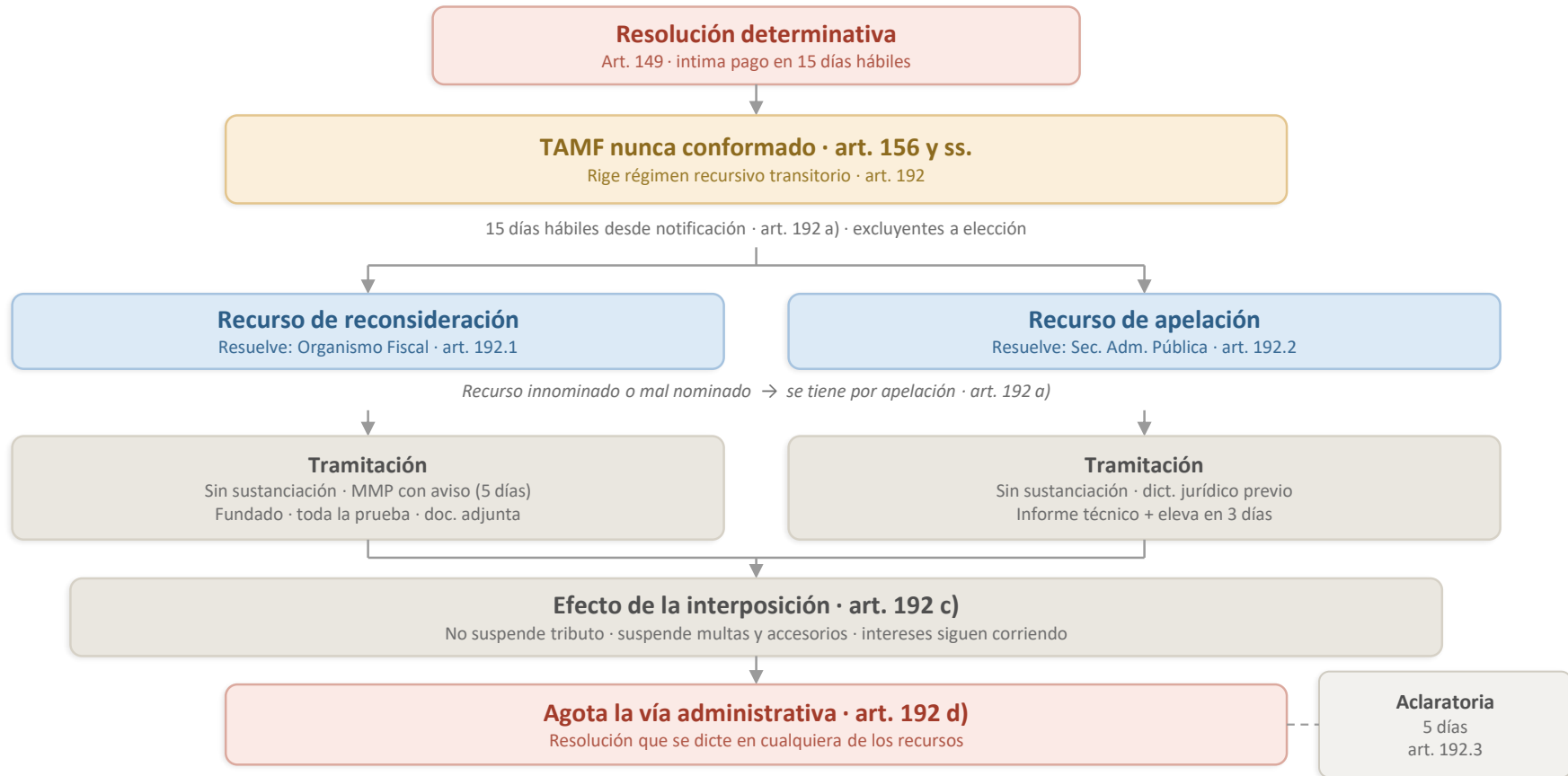
Recursos · Art. 43 y 45° — importante

- **Apelación:** sólo en causas en que la Provincia sea parte
- **Casación:** sólo c/sent. definitivas o autos que pongan fin a la acción
- c/ Provincia → APELACIÓN · c/ Municipalidad → CASACIÓN

Reposición

Procedimiento tributario municipal · Ord. 13623

Vía administrativa · régimen recursivo transitorio (art. 192) — desde la resolución determinativa



Procedimiento tributario municipal · Ord. 13623

Vía judicial · acción contencioso-administrativa — Ley 7182 (CPCA de Córdoba)

30 días para interponer demanda · Ley 7182

Demanda contencioso-administrativa · Ley 7182

Cámaras C.A. 1ª, 2ª y 3ª nom. (Arturo M. Bas) · art. 162 y ss. CTP

No rige el solve et repete · sin pago previo

Solicitud de suspensión del acto · art. 19 Ley 7182

Se funda el grave daño · vista a la contraria 5 días · tribunal resuelve 10 días

Solo el requerimiento + notificación → prohibición de innovar hasta 60 días

Trámite previo a la sentencia

Actuaciones adm. (10 d.) → Fiscal de Cámara → traslado demanda 18 d. → prueba 30 d. → alegatos 9 d.

Sentencia · plazo 60 días

Autos para sentencia

Recursos contra la sentencia · art. 43° Ley 7182

Reposición · Aclaratoria · Casación (causa contra Municipalidad)

CASACIÓN → Art. 45 Ley 7182

(Recordar que apelación es sólo → causas c/ provincia)

TSJ · Sala Cont.-Adm.

Segunda instancia vía casación

Ciudad de Córdoba. CIACIS. Nuevo hecho imponible.

La Ciudad de Córdoba modificó su Código Tributario Municipal -Texto Ordenado 2022- (Ordenanza N° 13222 - B.O. 06/01/2022) con vigencia desde el presente período fiscal. Amplió el hecho imponible de la Contribución que incide sobre la actividad comercial, industrial y de servicios:

Hecho Imponible. Norma general. Art. 256.- Asimismo, estará gravado el ejercicio de la prestación de servicios digitales que desarrollen empresas comerciales, industriales y/o de servicios, entendiéndose por tal aquella que se realiza de manera continua y permanente a través de medios digitales, en virtud de los servicios municipales de contralor, regulación, fiscalización y/o reglamentación del comercio electrónico que garanticen el correcto funcionamiento de la infraestructura del comercio digital, que garantizan el adecuado funcionamiento de la infraestructura digital local y promueven el desarrollo económico y social de los comercios en línea (tiendas online).

Ciudad de Córdoba. CIACIS. Nuevo hecho imponible.

¿Pueden las Entidades Bancarias ser declaradas agentes de retención?

CTM . Artículo 39.- La persona o entidad que abone o reciba sumas de dinero de contribuyentes y/o responsables de los tributos legislados en este Código, o que intervenga en actos gravados por los mismos, actuará como agente de retención o percepción o recaudación e información, en la forma y condiciones que establezca el Organismo Fiscal, el que tendrá amplias facultades para crear, modificar y suprimir los respectivos regímenes.

Alternativas judiciales



Acción declarativa de certeza frente a la presión tributaria municipal y federal.

*El problema del federalismo. La justicia federal y local.
La instancia originaria y la vía ordinaria.*

La mayoría de las veces, el desafío para discutir, es de orden procesal.



Las acciones declarativas, son de enorme significación en el entramado jurídico actual. Entonces es dirimente la vía, pero también la competencia.

¿Cómo debe armonizarse el ejercicio de los distintos niveles de gobierno? Tiene que ver con equilibrar el poder de los distintos actores de nuestra forma de gobierno.

Los poderes de las provincias son originarios e indefinidos y los delegados a la Nación son definidos y expresos, pero dichas potestades provinciales no pueden enervar el ejercicio razonable de los poderes delegados al gobierno federal, so pena de convertir en ilusorios los propósitos y objetivos de las citadas facultades que fincan en la necesidad de procurar eficazmente el bien común de la Nación toda, en el que necesariamente se encuentran engarzadas y del cual participan todas las provincias (Fallos: 304:1186; 312:1437; 332:66, entre otros)

ADC

Acción declarativa de certeza

¿Por qué hablamos de acción declarativa de certeza? ¿Es una acción preventiva?
Diferencias entre el ámbito nacional y provincial.

El ámbito nacional.

"Festival de Doma y Folklore c. Estado Nacional s/ acción meramente declarativa de derecho",
20/O2/2018

La acción declarativa de certeza debe responder a una "causa" o "caso contencioso" (art. 116 de la Constitución Nacional, art. 2 de la ley 27), no pudiendo tener un carácter simplemente consultivo ni importar una indagación meramente especulativa pues ello exigiría al Poder Judicial exceder las atribuciones jurisdiccionales concedidas por la Constitución Nacional (Voto de los Dres. Elena I. Highton de Nolasco y Carlos Fernando Rosenkrantz). (Fallos: 341:101)

"ello puede darse, por ejemplo, cuando en el tiempo previo al acto administrativo que concretaría el agravio, el derecho que el actor busca proteger se encuentra de hecho negado o cuando el costo en que debe incurrir durante dicho tiempo implica en la práctica la negación del derecho que busca proteger. Sin embargo, en casos de esta naturaleza es el actor quien debe acreditar de qué modo esa incertidumbre afecta sus derechos, a través de la exposición de los presupuestos de la acción y la demostración de que concurren en el caso. Así, debe hacer manifiesta la existencia de una actividad o un contexto normativo que, en forma actual, ponga en peligro el o los derechos invocados o les cause lesión con concreción suficiente para justificar la actuación del Poder Judicial. (Considerando 9, Voto de los Dres. Elena I. Highton de Nolasco y Carlos Fernando Rosenkrantz) (Fallos: 341:101)

El ámbito nacional

"Cepas c/ Córdoba" 20/6/26.

A los fines de analizar la procedencia de una acción declarativa de certeza cabe tener en cuenta que puede ocurrir que **la norma impugnada -por sí misma y sin necesidad de que concurra una actividad administrativa de aplicación- pueda llegar a producir una lesión concreta al accionante y cuando quien promueve la demanda invoca de manera fundada hallarse en una situación semejante, debe considerarse que la mera vigencia de la norma ha creado una vinculación de derecho entre las partes, una de las cuales tiene un interés serio y suficiente en poner fin al perjuicio que padece**, para lo cual resulta una vía idónea la declaración judicial de inconstitucionalidad de la norma y de las medidas que se ordenen con el fin de reconducir el ejercicio del poder público dentro de los límites de la Constitución. (Fallos: 348:405)

EL ÁMBITO PROVINCIAL

El ámbito provincial.

La acción declarativa de certeza del artículo 413 del C.P.C.C. específicamente en materia tributaria, como *vgr.* surge del caso "Croissant", en el cual la Cámara 6ª de Apelaciones en los Civil y Comercial de Córdoba hizo lugar a una acción de esta naturaleza, mediante la cual la actora pretendió que se declarara la prescripción de una obligación tributaria provincial.

(*cfr.* "Croissant, Andrea Silvia c/ Fisco de la Provincia de Córdoba", C6a Civ. y Com. Córdoba, 28/12/2009, La Ley Online AR/JUR/66818/2009).

Acción Declarativa de Certeza. Acción Contencioso Administrativa.

El problema en CÓRDOBA.

LA INEXISTENCIA DE SOLVE, PERO LA POSIBLE EJECUCIÓN.

Autos "Unilever de Argentina S.A. y Otros c/ Municipalidad de Córdoba – Acción Declarativa de Certeza – Recurso Directo". TSJ de Córdoba. Sentencia de fecha 25/04/2017.

Acción declarativa de certeza en contra de la Municipalidad de Córdoba a los fines de que se ponga fin a la incertidumbre creada por la demandada al pretender resultar acreedora del tributo denominado "Contribución que incide sobre la Actividad Comercial, Industrial y de Servicios" el TSJ declaró la incompetencia del fuero civil y comercial para entender en una causa que ya tenía dos sentencias de fondo. ¿Cómo puede tramitarse la acción ante el fuero Contencioso Administrativo, si no existen actos administrativos impugnables?

ALÍCUOTAS DIFERENCIALES. ART. 75 INC. 13.

CSJN. 23/4/26 El caso **YPF c/Chubut**: impuesto sobre los ingresos brutos (ISIB), supuesto en que no grava la retribución bruta de una cierta actividad onerosa y habitual desarrollada en territorio provincial, sino cuando, lo que resulta gravado, es la extracción de productos primarios. **El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba** (Sala Contencioso Administrativo) en la causa **Cargill c/ Córdoba - plena jurisdicción 12/2/19**, le dio la razón al contribuyente.

El 31/10/17, la CSJN dictó sentencias de fondo en las causas "Harriet y Donnelly" y "Bayer". En ambos casos, admitió los planteos de los contribuyentes, y declaró la inconstitucionalidad del tratamiento diferencial en el impuesto sobre los ingresos brutos contemplado por las legislaciones de las provincias del Chaco y Santa Fe en tanto carecían de pautas de distinción objetivas. La Corte Suprema de Justicia de la Nación consideró inconstitucional la aplicación de mayores alícuotas debido a la distinta jurisdicción de radicación de los contribuyentes.

CSJ 191/2024 LA PIAMONTESA S.A. c/ SALTA, PROVINCIA DE s/ACCION DECLARATIVA DE CERTEZA E INCONSTITUCIONALIDAD. 27/11/25 CAUTELAR.

CSJ 2853/2021 LA PIAMONTESA S.A. c/ MENDOZA, PROVINCIA DE s/ACCION DECLARATIVA DE INCONSTITUCIONALIDAD. 23/11/23 CAUTELAR.

EL CASO CORDOBA. LA ELECCIÓN DE LOS PLANTEOS

ADC

COMPETENCIA federal. PLANTEOS RELATIVOS A TASAS MUNICIPALES.





CASO DIOTEX C MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA

PARTES Y ANTECEDENTES

- DIOTEX: Corporación estatal argentina (spin-off de la Comisión Nacional de Energía Atómica)
- Demandado: Municipalidad de Córdoba
- Acción: ADC (Acción Declarativa de Certeza) iniciada en 2023

PRINCIPALES EVENTOS PROCESALES

Recusación del Juez Federal N° 2

El caso fue reasignado al Juez Federal N° 3.

16/02/2024: Dictamen de Casas Nolega

La Justicia Federal es competente (principio de interés nacional).

22/10/2024: La Cámara Federal, Sala B, revoca

El Juez Federal SÍ es competente.

La Municipalidad apela la medida cautelar

Medida cautelar solicitada

Se solicitó una orden de no innovar.

13/03/2024: El Juez Federal N° 3 se declara incompetente

18/12/2024: El Juez Federal N° 3 concede medida cautelar

Suspende el Art. 256 de la Ordenanza N° 13329 del Código Tributario Municipal por 3 meses o hasta la sentencia definitiva.

12/06/2025: Medida cautelar extendida

AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN (Junio 2025)

- La Municipalidad propone plan de pago con capital, intereses y reducción de multas.
- DIOTEX acuerda evaluar la propuesta en la reunión de Directorio (semana del 1 al 5 de julio).
- La Cámara Federal (Juez Sánchez Torres) prorroga la audiencia hasta el 4 de agosto de 2025.
- Las partes solicitan aplazamiento ya que las negociaciones están en estado avanzado.

Comenzar

CASO DIOTEX C MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA

Este caso de Acción Declarativa de Certeza (ADC) involucra a **DIOTEX**, una corporación estatal argentina creada por el Poder Ejecutivo Nacional como spin-off de la Comisión Nacional de Energía Atómica. El proceso judicial presenta una cronología de eventos clave en la determinación de la competencia y la aplicación de medidas cautelares.

2023

Se inició la ADC tras una notificación de vista previa de la Municipalidad.

Recusación del Juez Federal N° 2, el caso recae en el Juez Federal N° 3. Se solicitó una medida cautelar (orden de no innovar para detener la determinación municipal).

16/02/2024

Opinión de Casas Nobilega: la Justicia Federal es competente (principio de interés nacional, Art. 116 CN, Art. 2 Inc. 6 Ley 48).

13/03/2024

El Juez Federal N° 3 se declara incompetente.

22/10/2024

La Cámara Federal, Sección B, revoca y declara competente al Juez Federal.

03/12/2024

Se solicita otra medida cautelar (no innovar) al inicio de la Ejecución Fiscal.

18/12/2024

El Juez Federal N° 3 concede la medida cautelar, suspendiendo la aplicación del Art. 256 de la Ordenanza N° 13329 del Código Tributario Municipal por 3 meses o hasta la sentencia definitiva.

12/06/2025

La medida cautelar es extendida.

03/12/2024

Se solicita otra medida cautelar (no innovar) al inicio de la Ejecución Fiscal.

La Municipalidad apela la medida cautelar.

Junio 2025

La Cámara Federal (Sánchez Torres) convoca a audiencia de conciliación.

Regímenes de percepción en la Fuente

Límites de su utilización en la Administración Tributaria

La premisa: para hablar de percepción en la fuente, tiene que existir «fuente»

Sin actividad estatal concreta, efectiva e individualizada sobre el contribuyente, no hay tributo retributivo legítimo —

y, por extensión, no hay materia que habilite una percepción en la fuente.

EL DISPARADOR

Caso Córdoba

El llamado «impuesto a la valija»

Régimen municipal que pretende percibir tributo a sujetos sin presencia física en el ejido.

Pregunta guía → **¿Qué es Fallos 332:1503?**

01

Sustento territorial

presencia efectiva en el ejido

02

Hecho imponible

actividad estatal individualizada

03

Vía procesal

ante la ausencia de DD.OO.

Fallos 332:1503 — «Laboratorios Raffo S.A. c/ Municipalidad de Córdoba»

CSJN · 23 de junio de 2009 · remite al dictamen de la Procuradora Fiscal Laura M. Monti (25-XI-2008)

ENCUADRE

El tributo discutido

Contribución que incide sobre el Comercio, la Industria y las Empresas de Servicios (CCIES) — Municipalidad de Córdoba, períodos 1995-2000.

Situación fáctica de la actora

Vendía productos en la ciudad de Córdoba a través de un agente de propaganda médica (con domicilio particular allí) y de un distribuidor tercero, pero **carecía de local, depósito o establecimiento** en el ejido municipal.

TSJ Córdoba

Convalidó la pretensión municipal: sostuvo que la distinción entre tasa e impuesto «carece de perfiles claros o tajantes» y que su naturaleza es «meramente estructural».

DOCTRINA — DICTAMEN MONTI · CSJN

1. Tasa vs. impuesto

La diferencia queda determinada por la existencia o no, en el presupuesto de hecho, del desarrollo de una actividad estatal que atañe al obligado. La forma en que el contribuyente desempeña su actividad no muta la naturaleza jurídica del tributo.

2. Calificación de la CCIES

El art. 167 del Código Tributario Municipal vinculaba el hecho imponible «en virtud de los servicios municipales» enumerados → es tasa, no impuesto. Y el propio Fisco la calificaba reiteradamente como tasa.

3. Estándar para el cobro de la tasa

Debe corresponder siempre a una concreta, efectiva e individualizada prestación de un servicio referido a algo no menos individualizado (bien o acto) del contribuyente — art. 17 CN.

4. Resultado

Sin asiento territorial, el cobro es ilegítimo.

Situación fáctica — Resoluciones 24O/O3 y 22/O3

El régimen de percepción de la CIACIS sobre clientes radicados en la Ciudad de Córdoba

NORMA

Resolución 24O/O3

Secretaría de Economía y Finanzas — Municipalidad de la Ciudad de Córdoba

NORMA

Resolución 22/O3

Dirección General de Rentas — Municipalidad de la Ciudad de Córdoba



MECANISMO

Se obliga a clientes radicados en la Ciudad de Córdoba a retener la CIACIS al efectuar pagos de compras de productos a empresas que carecen de local en la Ciudad.

Es decir: el Municipio captura, por vía indirecta y a través de un tercero, materia tributaria de un sujeto sobre el que no puede acreditar sustento territorial — el supuesto fáctico que la CSJN descalificó en **Raffo**.

Entramado procesal — la dificultad para impugnar

EL PROBLEMA

El Municipio evita el procedimiento de determinación de oficio (DD.OO.)

Consecuencia inmediata

No hay acto administrativo susceptible de ser impugnado por las vías recursivas tributarias ordinarias.

El contribuyente queda obligado a soportar la percepción —que opera de pleno derecho sobre los pagos recibidos— sin un acto que pueda discutir.

LA RESPUESTA

¿Qué vías procesales quedan disponibles en Córdoba?

→ desarrollo en filmína siguiente

Vías procesales en Córdoba — planteos y estado procesal

VÍAS PROCESALES

Caminos disponibles

Análisis de las vías idóneas en jurisdicción de Córdoba ante la ausencia de DD.OO. y de acto administrativo previo.

PLANTEOS

Argumentos centrales

Algunos planteos formulados — doctrina Raffo, ausencia de sustento territorial, exorbitancia del régimen, lesión a la coparticipación.

ESTADO PROCESAL

Situación actual

Estado procesal vigente de las causas en trámite.

Caso Credicoop — el planteo de fondo

¿Tiene que integrar el hecho imponible el agente de retención?

VÍA PROCESAL

Vía procesal del planteo

Cómo se canaliza el planteo cuando no hay un acto determinativo previo: análisis de las herramientas habilitadas en la jurisdicción.

LEGITIMACIÓN

Cuestiones atinentes a la legitimación

Causa «Pre Cantaluppi c/ Municipalidad de San Carlos de Bariloche»

Fallos 343:365

El camino seguido — la pregunta central: ¿hay fuente?

EL TEST DECISIVO

¿Hay fuente?

Reconstrucción del razonamiento aplicado a la luz de la doctrina de Raffo: sustento territorial, actividad estatal individualizada y prestación efectiva del servicio.

María Vázquez · Procedimiento Tributario

"Banco Credicoop Cooperativo Limitado c/ Municipalidad de Córdoba". Cam. Cont. Admin. de 3° Nom., sentencia de fecha 21/05/2020.

la CSJN ha conceptualizado a los agentes de retención como aquellos a los que la Ley les atribuyó el deber de practicar retenciones por deudas tributarias de terceros, sobre los fondos de que disponen, **cuando con su intervención se configura el presupuesto de hecho determinado por la norma legal**, y los obliga a ingresar al Fisco los importes retenidos en el término y las condiciones establecidas, puesto que tal actividad se vincula con el sistema de percepción de los tributos (...) (Cfr. "Cintafón SRL", sentencia del 03/04/1986)."

"... sólo resultan susceptibles de actuar como agentes de retención y/o percepción, quienes son parte en un acto jurídico en el cual la contraparte, por razón de dicho acto, es deudor del fisco; con lo cual **la responsabilidad por deuda ajena que prevén las legislaciones tributarias presuponen una relación entre el hecho imponible y el sujeto obligado, un vínculo jurídico con el contribuyente**. Y es tal relación directa con el hecho imponible nacido en cabeza del contribuyente la que justifica la responsabilidad solidaria frente al fisco, que le atribuye la norma tributaria."

"En definitiva, atento a su naturaleza de "tasa" municipal, la mencionada Contribución es incompatible con el régimen de retención instituido por el municipio para su cobro. En dicho contexto, asiste razón a la actora en cuanto postula que su designación en carácter de agente de retención de la Contribución que incide sobre la Actividad Comercial, Industrial y de Servicios, *violenta el principio constitucional de racionalidad, de propiedad y de igualdad de las cargas públicas*, en tanto su actuación en el ámbito privado resulta totalmente ajena a la relación jurídica del contribuyente con el fisco.

"La razonabilidad de los regímenes de retención y de la consecuente atribución de responsabilidad solidaria a un tercero, está dada cuando la retención o detracción es una consecuencia del negocio privado celebrado entre el tercero y el contribuyente, hecho fáctico que fundamenta la obligación de retener, lo que no sucede en el supuesto de autos, ya que, repito, la configuración del hecho imponible no se relaciona con dicha relación jurídica."

Tribunal Superior de Justicia, sentencia de fecha 24/O2/2022.

"el Organismo Fiscal local se ha limitado, al amparo de dicho marco normativo, a concretizar el mandato del Legislador en las resoluciones administrativas cuestionadas, mediante la designación en ejercicio de facultades expresamente conferidas y que resultan compatibles con las normas que regulan los gravámenes de cuya percepción se trata, de las personas físicas o jurídicas que puntualmente deberán actuar como agentes de retención de la Contribución (...)"

"En definitiva, el Legislador municipal ha establecido una regulación esencial y básica a través de la cual marca las grandes líneas directivas, dejando al Organismo especializado el cuidado de precisar el casuismo o individualización de los sujetos que actuarán como agentes de retención..." (...)

A la luz de lo expuesto, no se advierte que la demandada haya excedido su potestad reglamentaria al sancionar las resoluciones impugnadas. Por el contrario, se ha limitado a aclarar expresamente lo que ya se encontraba normado en el Código Tributario aplicable teniendo en cuenta el contexto normativo en su totalidad.

El dictamen de la Procuración- 29/4/25 vs. Dictamen en Banco Nación c/Municipalidad de Córdoba. 27/8/25.

Análisis de la opinión emitida por la Procuración General de la Nación.

1

/

FUNDAMENTOS

Fundamentos esenciales

2

//

ESTÁNDAR

Estándar adoptado

3

///

EFFECTOS

Efectos sobre la causa

Antecedentes

/

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires

SA Importadora y Exportadora de la Patagonia s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado

12/11/2008

//

DICTAMEN PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN

Incidente N° 2 - ACTOR: ESTABLECIMIENTO LAS MARIAS S.A.C.I.F.A. DEMANDADO: AGENCIA TRIBUTARIA MISIONES A.T.M. s/INC DE MEDIDA CAUTELAR

10/09/2025

La fuente como condición de validez

Sin actividad estatal concreta, efectiva e individualizada sobre el contribuyente —ni sustento territorial verificable— el régimen de percepción carece de la fuente que constitucionalmente lo habilita.

Amparo - Requisito de Inexistencia de Vía Más Idónea

El caso "Ethical Salud S.A. c/ Municipalidad de Córdoba" es un claro ejemplo de la aplicación del requisito de la vía más idónea en las acciones de amparo.

Naturaleza del Amparo

Acción extraordinaria que procede solo si no existen otros remedios judiciales más idóneos.

Requisito Fundamental

Inexistencia de "otro medio judicial más idóneo" (Art. 43 CN y Art. 48 Const. Prov.).

Principio Clave

El amparo presupone el "desamparo" – la inoperancia de todos los demás trámites procesales.

El Caso Concreto: Ethical Salud S.A.

Detalles de la Demanda

- **Demandante:** Empresa Ethical Salud S.A.
- **Cuestión:** Retenciones de CIACIS por PAMI sin local comercial en Córdoba.
- **Pretensión:** Declarar ilegítimas las retenciones y obtener medida cautelar urgente.

Resultado y Fundamento del Rechazo

Resultado: RECHAZADO IN LIMINE

- Existía vía ordinaria más idónea (procedimiento contencioso administrativo).
- La vía ordinaria ofrece mayor amplitud de debate y prueba.
- Cuenta con mecanismos para medidas previas/cautelares.
- No se acreditó circunstancia concreta que justifique acción extraordinaria.

Conclusión: El amparo no es la vía para cuestiones que pueden resolverse por procedimientos ordinarios, aunque sean más lentos.

Acción Declarativa de Inconstitucionalidad (ADI)

Impuesto inmobiliario: el legislador Agrelo hizo un reclamo como contribuyente

Lo hizo ante el Tribunal Superior de Justicia, por un inmueble que heredó junto a sus hermanos. Su presentación busca declarar inconstitucional la ley impositiva.

17/02/2025 | 07:33 Redacción Cadena 3



^ Eliji tu emisora

Lo último >

- 13:07 Mundo
Anthropic se prepara para su salida a bolsa en Wall Street con un paso clave
- 13:55 Tecnología
Startup de IA supera a agencias gubernamentales en pronósticos del clima
- 13:54 Tecnología
SpaceX advierte sobre posible emisión de acciones en futuras transacciones



La Argentina Posible
Fernando Gansse
Cadena 3



Base Constitucional: Art. 165, inc. 1º, ap. "a"

Texto normativo

El Tribunal Superior de Justicia es competente para conocer y resolver originaria y exclusivamente, en pleno, de las acciones declarativas de inconstitucionalidad de leyes, decretos, reglamentos, resoluciones, Cartas Orgánicas y ordenanzas que contraríen la Constitución provincial, y se controvertan en caso concreto por parte interesada.

Elementos habilitantes

- Competencia originaria y exclusiva del TSJ en pleno
- Objeto: normas de carácter general, abstracto e impersonal
- Contrariedad con la Constitución de la Provincia de Córdoba
- Controversia en caso concreto por parte interesada

Trámite Procesal Aplicable

Tratandose de una especie de una acción declarativa de inconstitucionalidad (art.165, inc. 1º, ap. "a" de la Carta Magna Provincial), que participa de la naturaleza de las acciones declarativas (arts. 413 y 418, inc. 3, CPCyC) corresponde adoptar el procedimiento de juicio abreviado previsto en su artículo 507 y subsiguientes del CPCyCyC.



Interposición



Juicio abreviado



Resolución TSJ

③ TSJ, 22/06/2016 — "SINDICATO DE EMPLEADOS PÚBLICOS Y OTROS C/ PROVINCIA DE CÓRDOBA Y OTRA — ACCIÓN DECLARATIVA DE INCONSTITUCIONALIDAD" (Expte. SAC N° 2669644), entre otros.

Carácter Preventivo de la ADI

A más de la existencia de un caso constitucional, la acción se trata de una herramienta preventiva, que se interpone de manera previa a la producción de efectos jurídicos de la norma en tanto se verifica el supuesto en el marco antes descrito del "derecho en trance".

Función preventiva

Control a priori, antes del despliegue individualizado de la norma en el ordenamiento jurídico.

Función reparadora

Control indirecto y a posteriori, cuando ya media lesión o actividad suficiente de concreción de la norma.

Requisitos de la Acción

Conforme la doctrina de Elcira María Torres Aliaga ("*Algunos aportes en torno a la Acción Declarativa de Inconstitucionalidad y a su carácter preventivo*", *Revista de Derecho Constitucional*, Año 1, N° 1, pp. 107-122), en el caso concreto se verifican los siguientes requisitos:

1

Instancia de parte interesada

Existe legitimación activa de parte interesada para promover la acción.

2

Norma vigente y lesiva

El acto impugnado es una norma que regula conductas en forma general, abstracta e impersonal, que se encuentre vigente, suscitándose dudas sobre su adecuación a la Carta Magna, siendo además lesiva del ordenamiento constitucional local.

3

Caso concreto

Se verifica la existencia de un "caso" concreto que habilita el control.

4

Materia constitucional originaria

La norma regula sobre materia regida por la Constitución de Córdoba en forma originaria, con reiteración de lo dispuesto por la Constitución Nacional.

Definición de la ADI Provincial

"La acción directa de inconstitucionalidad provincial es una acción sustancial mediante la cual se viabiliza el ejercicio de la jurisdicción constitucional en instancia originaria atribuida taxativamente al Tribunal Superior de Justicia por la norma referida, y habilita el control directo de constitucionalidad de leyes, decretos, reglamentos, resoluciones, cartas orgánicas y ordenanzas, que estatuyan sobre materia regida por esta Constitución, y se controviertan en caso concreto por parte interesada."

TSJ de Córdoba — "PETROQUÍMICA DE RÍO TERCERO S.A. C/MUNICIPALIDAD DE RÍO TERCERO — ACCIÓN DECLARATIVA DE INCONSTITUCIONALIDAD" — Expte. 1961192 — 27/06/2016.

Plazos y Perentoriedad en el Sistema Cordobés

Ausencia de plazo de caducidad

En el sistema procesal constitucional cordobés, **no está previsto un plazo perentorio de caducidad** para la interposición de la ADI, a diferencia de lo que ocurre en otras provincias argentinas.

No obstante, ello no minimiza la circunstancia de que el control directo de constitucionalidad que conlleva la ADI supone que ese examen debe concretarse **a priori**, desde la incorporación misma de la norma al ordenamiento jurídico.

La perentoriedad característica

En esto radica, precisamente, la perentoriedad característica de nuestro sistema y lo que justifica la función preventiva de esta acción de indudable corte iuspublicista, por oposición a la función reparadora de las otras vías, en las que el control siempre es indirecto (al servicio de la certeza de una relación jurídica ya trabada) y a posteriori (cuando ya media una lesión, justamente, en virtud de la regulación que emerge de la disposición cuestionada o, si aún no media lesión, al menos ya hay actividad suficiente de concreción de la norma o del acto en cuestión). Conf. "PEDROTTI, MONICA CAROLINA C/ SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA - MINISTERIO DE EDUCACIÓN - ACCION DECLARATIVA DE INCONSTITUCIONALIDAD" (expte. SAC n.º 7561591), sentencia del TSJ del 24/08/2020

Confirmación Judicial del Carácter Preventivo

"La Acción Declarativa de Inconstitucionalidad se adelanta a la actividad de ulterior aplicación y de concreción individualizada de la disposición."

TSJ de Córdoba — Auto Nro. 44 del 22/04/2004 en autos "Calvo, Carolina c/ Municipalidad de Río Cuarto – Acción Declarativa de Inconstitucionalidad" Expte. 11644745.
Esta jurisprudencia refuerza el entendimiento de la ADI como una herramienta de control constitucional que actúa **a priori**, evitando la producción de efectos lesivos antes de que estos se materialicen plenamente.



Jurisprudencia Relevante del TSJ

22/O6/2016 — Sindicato de Empleados
Públicos c/ Provincia de Córdoba

Expte. SAC N° 2669644. El TSJ adoptó el procedimiento de juicio abreviado (art. 507 y ss. CPCyC) para tramitar la ADI, dada su naturaleza de acción declarativa.

22/O4/2024 — Calvo, Carolina c/
Municipalidad de Río Cuarto

Expte. 11644745 — Auto N° 44. Reafirmación del carácter preventivo de la ADI, que *"se adelanta a la actividad de ulterior aplicación y de concreción individualizada de la disposición"*.

27/O6/2016 — Petroquímica de Río
Tercero S.A. c/ Municipalidad de Río
Tercero

Expte. 1961192. Definición de la ADI como acción sustancial que viabiliza el ejercicio de la jurisdicción constitucional en instancia originaria.

24/O8/2020 — Pedrotti, Mónica Carolina
c/ Superior Gobierno de la Provincia de
Córdoba

Expte. SAC N° 7561591. Fundamentación de la perentoriedad del sistema cordobés y la justificación de la función preventiva de la ADI.

Caso Agrelo c/ Provincia de Córdoba — ADI (Expte. SAC 13605084)

Dictamen del Tribunal Superior de Justicia (3 de octubre de 2025)

Demandante: Rodrigo María Agrelo (heredero de Norberto Agrelo)

Objeto: Impugnación de inconstitucionalidad del artículo 189 del Código Tributario Provincial (CTP), artículo 128 de la Ley Impositiva Anual 2025, Resolución SIP n.º 60/2024 y Resolución Interna DGC n.º 3621/2025, por violación de principios de legalidad, propiedad, igualdad y razonabilidad.

Agravio principal: El Coeficiente de Equidad Inmobiliario (CEI) permite aumentos sin límites en el impuesto inmobiliario. En el caso concreto, el impuesto pasó de \$42.000 (dic. 2024) a \$169.000 (ene. 2025), un incremento del 172,51% que excede el tope legal del 172,5% (RIPE).

Sentencia del TSJ

Decisión: INADMISIBLE la Acción Declarativa de Inconstitucionalidad.

Fundamentos principales:

1

Normas consolidadas en su uso

El artículo 189 del CTP ha estado vigente desde 2020 sin impugnación previa. La ADI es una vía preventiva que debe ejercerse inmediatamente después de la entrada en vigor de la norma, no años después.

2

Falta de carácter preventivo

La obligación tributaria ya se había devengado (1º de enero de 2025) y la liquidación ya había sido emitida. El TSJ señaló que "la pretensión declarativa de inconstitucionalidad no es compatible con el carácter preventivo de la acción directa de inconstitucionalidad, en cuanto las normas cuya constitucionalidad se persigue revisten operatividad directa."

3

Norma no autoaplicativa

El último párrafo del artículo 128 requería de una pauta reglamentaria (Resolución DGC n.º 3621/2025) para definir qué inmuebles tenían "valor significativo". Hasta que esa resolución se dictara, la norma no podía proyectarse sobre derechos concretos.

4

Operatividad ya consumada

Al momento de interponer la ADI (17/2/2025), el plazo de pago ya había vencido (14/2/2025). La relación jurídica entre el Fisco y el contribuyente ya estaba consolidada.

Conclusión del Tribunal

El TSJ enfatizó que la ADI es una acción excepcional y preventiva. No puede utilizarse para retrotraer o revertir efectos de normas ya aplicadas. En este caso, corresponde al contribuyente impugnar administrativamente la liquidación y luego recurrir al fuero especializado tributario (Ley n.º 7182).

Plazos: Se restablecen los plazos para impugnación administrativa desde la notificación de la sentencia.